

La otra cara de la “Ciudad Blanca”

Por Julia

El asentamiento “Laura Mercedes Simmonds” nació a raíz del terremoto de 1983 que destruyó una parte considerable de Popayán. Entonces, muchas familias que vivían en arriendo y vieron sus residencias destruidas, invadieron terrenos en todo Popayán creando unos 50 barrios y asentamientos nuevos.

En los años siguientes al terremoto, la alcaldía legalizó la mayoría de esos barrios, pero otros, sobre todo los ubicados en zonas de riesgo, siguen siendo asentamientos ilegales.

Eso es el caso del “Laura Mercedes Simmonds”.

En el asentamiento viven unas 120 familias, en total unas 600 personas. De los fundadores del asentamiento quedan pocos, muchos se fueron porque encontraron vivienda o porque se cansaron de las miserables condiciones de vida, y vendieron “la mejora”, como llaman el rancho de madera, plástico, zinc, sin piso firme, casi siempre de una sola pieza donde se encuentran el rincón de la cocina, el baño, los pocos muebles.

Los ranchos están construidos a orillas de la quebrada Pubús, la cual, cuando llueve mucho, se acrecienta, inunda el asentamiento y arrastra a su paso las pocas pertenencias de la gente.

Como se trata de un asentamiento “ilegal”, no llegan los servicios públicos sino que a los pobladores les toca cogerlos de contrabando, lo cual explica los frecuentes cortes.

Hay muchas familias donde la madre es la cabeza del hogar y los niños son muchos. La gran mayoría de los habitantes del asentamiento viven del rebusque, de los trabajos mal pagados que encuentran de vez en cuando y del reciclaje.

Los niños y jóvenes asisten a las instituciones educativas de los barrios vecinos, pero muchos con problemas debido al grado de desnutrición que sufren, lo cual se manifiesta en problemas de concentración y en general en bajo rendimiento escolar. Algunos ni siquiera pueden aportar los 200 pesos que vale el almuerzo en el restaurante escolar.

Frente a esa situación de miseria, la Alcaldía muestra un desinterés casi total. Los pocos beneficios de programas sociales disponibles son designados a la “rosca política” del alcalde de turno. Y los pocos proyectos de vivienda de interés social nunca alcanzan para la cantidad de personas que necesitan vivienda en el departamento del Cauca.

Así fue con el último proyecto de vivienda, que además entregó casitas de una sola pieza, parecidas a los ranchos en que viven actualmente, por un costo de 18 millones de pesos. De éstos, la Nación aportó 8 millones como subsidio de vivienda, los restantes 10 millones los tenían que aportar los pobres mismos. Pero a personas que viven del rebusque ninguna entidad financiera les daría crédito; además, les da miedo endeudarse, pues ¿cómo devolver la deuda si la plata a veces ni alcanza para las tres comidas al día?